

SENTENCIA DEL 5 DE AGOSTO DE 2009, NÚM. 1

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 8 de agosto de 2006.

Materia: Civil.

Recurrente: Banco Dominicano del Progreso S. A., Banco Múltiple.

Abogados: Licdos. Cristian M. Zapata Santana y Ernesto A. Jansen Ravelo.

Recurrida: Hacienda Masara, S. A.

Abogado: Lic. Domingo O. Muñoz Hernández.

CAMARA CIVIL

Casa

Audiencia pública del 5 de agosto de 2009.

Preside: Rafael Luciano Pichardo.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco Dominicano del Progreso S. A., Banco Múltiple, institución bancaria organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio social y asiento principal en el edificio marcado con el núm. 3, de la avenida John F. Kennedy, de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, representado por Lourdes Paiewonsky de Abbott, dominicana, mayor de edad, casada, funcionaria bancaria, cédula de identidad y electoral núm. 037-0002483-3, domiciliada y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 8 de agosto de 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Domingo Muñoz Hernández, abogado de la parte recurrida Hacienda Masara, S. A.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 14 de agosto de 2006, suscrito por los Licdos. Cristian M. Zapata Santana y Ernesto A. Jansen Ravelo, abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de

Justicia el 23 de agosto de 2006, suscrito por el Licdo. Domingo O. Muñoz Hernández, abogado de la parte recurrida Hacienda Masara, S. A.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 7 de abril de 2009, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama así mismo, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 14 de febrero de 2007, estando presente los jueces Margarita A. Tavares, en funciones de Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretario de esta Cámara, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que la sentencia atacada y los documentos que los informan revelan que, con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la actual recurrida contra el recurrente, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en sus atribuciones civiles, el 7 de diciembre del año 2005, una sentencia con el dispositivo siguiente: “**Primero:** En cuanto a la forma, declara buena y válida la demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por el señor Rafael Rijo Santana y la razón social Hacienda Masara, S. A., contra el Banco Dominicano del Progreso, por haber sido interpuesta conforme al derecho; **Segundo:** En cuanto al fondo, acoge en parte la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Rafael Rijo Santana y la razón social Hacienda Masara, S. A., y, en consecuencia, impone al Banco Dominicano del Progreso, S. A., el pago de una indemnización por la suma de RD\$7,600,000.00, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por los demandantes; **Tercero:** Condena a la parte demandada, Banco Dominicano del Progreso, S. A., al pago de un interés de uno punto cuatro por ciento (1.4%) mensual de dicha suma, contados a partir de la fecha de la notificación de esta sentencia; **Cuarto:** Condena a la parte demandada, Banco Dominicano del Progreso, S. A., al pago de las costas del procedimiento, y se ordena la distracción de las mismas a favor de los licenciados Domingo O. Muñoz Hernández y Ricardo Ravelo Jana”; que dicha sentencia fue objeto de sendos recursos de apelación, principal pero parcial por parte de Hacienda Masara, S. A., y el otro incidental de manera total por el Banco Dominicano del Progreso, S. A., resultando el fallo ahora impugnado, cuyo dispositivo se expresa así: “**Primero:** Declara buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por: a) Hacienda Masara, S. A., y b) Banco Dominicano del Progreso, S. A., contra la sentencia civil núm. 1742-05, relativa al expediente 036-05-0121, de fecha 07 de diciembre de 2005, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber intervenido en tiempo hábil y en la forma que reglamenta la ley; **Segundo:** En cuanto al

fondo, los rechaza; en consecuencia, confirma en todas sus partes las sentencia impugnada, para que sea ejecutada conforme su forma y tenor, por los motivos ut supra enunciados; **Tercero:** Compensa las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes en puntos de derecho”;

Considerando, que el recurrente apoya su recurso en los medios de casación siguientes: **“Primer Medio:** Violación a la ley.- Violación al artículo 1134 del Código Civil.- **Segundo Medio:** Falta de base legal e insuficiencia de motivos.- **Tercer Medio:** Violación a la ley.- **Cuarto Medio:** Desnaturalización de los hechos”;

Considerando, que en el segundo medio planteado por el recurrente, cuyo examen prioritario es procedente por la solución que se le dará al caso, se argumenta en síntesis, que la Corte a-quia incurre en insuficiencia de motivos y falta de base legal, porque no contesta de ninguna manera con motivaciones de hecho y de derecho los pedimentos contenidos en las conclusiones del Banco recurrente, especialmente en cuanto a la inadmisibilidad solicitada, la cual ni se menciona en los motivos, y sobre la falta de pruebas de los alegados perjuicios supuestamente sufridos, “lo que lesiona el derecho de defensa del Banco recurrente”; que los jueces de apelación “tampoco se preocuparon de motivar el monto de su abusiva condenación”, pues aparte de que el Banco no reconoce haber ocasionado daño alguno a la recurrida, el monto de la indemnización es “totalmente desproporcionado en relación con los supuestos daños”, sin señalar, además, en qué se basaron para retener dicho monto, culminan los alegatos contenidos en el medio bajo estudio;

Considerando, que, ciertamente, como alega la recurrente, las conclusiones vertidas por ella en barra, según consta en la página 4 del fallo objetado, incluyeron un pedimento de inadmisión de la demanda original, que no fue ponderado ni contestado por la Corte a-quia, abordando directamente la cuestión de fondo sometida a su examen, aunque limitando su decisión al respecto a expresar en forma muy generalizada, con insuficiente precisión, que “en la especie se encuentran configurados los elementos constitutivos de la responsabilidad civil...”, y que el actual recurrente “cometió irregularidades durante el proceso de embargo inmobiliario objeto de esta contestación”, como lo fue “perseguir un proceso notificado en un domicilio que no es el del demandado, no obstante tener conocimiento de que la parte perseguida lo tenía en otro lugar”; que, en cuanto a la indemnización acordada en el caso, la Corte a-quia expuso, pura y simplemente, sin un análisis sopesado sobre el particular, que en la determinación de su cuantía “debe ser respetado el principio de la razonabilidad entre el monto, la gravedad y magnitud de los daños sufridos, por lo que la Corte entiende que la indemnización fijada... se ajusta a los daños sufridos” (sic);

Considerando, que, como se observa en la motivación reproducida precedentemente, sustento capital de la solución adoptada en el caso, la misma adolece, aparte de que no fue dirimida por la Corte a-quia la inadmisibilidad propuesta, conforme lo denuncia la recurrente, de una evidente insuficiencia de motivos respecto de la responsabilidad civil objeto de la litis en cuestión, cuyos hechos constitutivos no están debidamente definidos en el fallo atacado,

ni tampoco las pruebas en que descansa la falta atribuida al hoy recurrente, refiriendo de manera simple e indeterminada, sin mayores detalles, la comisión por parte del Banco ahora recurrente de irregularidades en un proceso de embargo inmobiliario notificado al demandado en un domicilio alegadamente erróneo; que, asimismo, la sentencia cuestionada, como se ha visto, omite establecer con exactitud los daños sufridos por la reclamante, y los elementos de juicio que le permitieron ratificar la cuantía de la reparación fijada en primera instancia, como manifiesta acertadamente la recurrente en su memorial;

Considerando, que, en tales condiciones, la ostensible insuficiencia de motivos de que adolece la decisión criticada, según se ha dicho, se traduce en la falta de base legal aducida por el recurrente, marcada por una incompleta exposición de los hechos de la causa, que no le ha permitido a esta Corte de Casación ejercer su poder de control y verificar si, en la especie, la ley ha sido o no bien aplicada, por lo que procede, en consecuencia, admitir el medio analizado y casar la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los demás medios de casación;

Considerando, que, en virtud del artículo 65 -numeral 3- de la Ley sobre Procedimiento de Casación, procede compensar las costas del procedimiento.

Por tales motivos, **Primero:** Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles el 8 de agosto de año 2006, por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito en otro espacio de este fallo, y envía el asunto a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; **Segundo:** Compensa las costas procesales.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 5 de agosto de 2009, años 166° de la Independencia y 146° de la Restauración.

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do